

La carrera de 2027 ya comenzó, pero el empleo y el IMSS ponen los pies en la tierra

Mientras Morena libra competencias internas cerradas y la oposición busca defender sus principales bastiones, el país enfrenta una realidad menos electoral y mucho más cotidiana: 54.8% de las personas ocupadas permanece en la informalidad, el empleo formal perdió dinamismo y el IMSS tuvo que salir a explicar que las quejas ante la CNDH no significan automáticamente violaciones a derechos humanos. Las campañas empiezan a correr; las instituciones todavía tienen que demostrar que pueden responder.

La elección de 2027 todavía no inicia formalmente, pero en distintos estados ya se disputa como si las urnas estuvieran a la vuelta de la esquina. Aspirantes solicitan licencias, recorren territorios, construyen estructuras y aparecen en encuestas mientras las dirigencias intentan conservar el control de procesos internos que se vuelven más complejos conforme aumenta el valor de cada candidatura.

Tlaxcala es el ejemplo más evidente. Morena aparece con 51% de la intención de voto, muy por encima del PRI y el PAN, que registran 7% cada uno, y de Movimiento Ciudadano, que alcanza 5%. Sin embargo, dentro del partido gobernante la competencia está completamente abierta: Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez García tienen 27% cada uno. La oposición está lejos, pero los dos aspirantes morenistas están separados por una fotografía.

Eso modifica la naturaleza de la elección. Cuando un partido tiene una ventaja tan amplia, la contienda decisiva puede ocurrir antes de la campaña constitucional. Ganar la encuesta interna se convierte prácticamente en obtener el boleto principal hacia el gobierno estatal, lo que eleva la presión sobre la metodología, la dirigencia y los grupos que apoyan a cada perfil.

Morena necesita algo más que anunciar un ganador. Tendrá que demostrar que la encuesta fue confiable, que no hubo intervención indebida de gobiernos o programas públicos y que quienes pierdan tendrán espacio dentro del proyecto. El problema de las organizaciones dominantes no suele ser la falta de aspirantes, sino conseguir que todos acepten un resultado que sólo favorece a uno.

El escenario cambia en Querétaro. Una medición difundida por Reporte Índigo coloca al PAN con 48.2%, frente a 24.7% de Morena. Aunque toda encuesta debe revisarse con cautela, el dato confirma que Acción Nacional conserva territorios donde puede competir desde una posición de fortaleza.

La próxima elección no será una sola batalla nacional, sino 17 disputas estatales con características propias. En algunos lugares, Morena deberá evitar que su competencia interna rompa la unidad; en otros, tendrá que enfrentar gobiernos opositores, estructuras consolidadas y candidatos con presencia territorial. El mapa electoral mexicano no es uniforme, aunque a veces los discursos nacionales pretendan pintarlo de un solo color.

Movimiento Ciudadano también prepara su decisión. Luis Donaldo Colosio Riojas mantiene abierta la posibilidad de competir en Sonora o Nuevo León. El senador ha dicho que todavía no es momento de anunciar su futuro, pero una plenaria de MC programada en Guaymas mantiene viva la lectura de que podría inclinarse por su estado natal.

Colosio es uno de los nombres con mayor reconocimiento dentro del partido naranja, pero el reconocimiento no reemplaza la organización. Ganar una gubernatura requiere candidaturas municipales, representantes de casilla, estructura territorial y una narrativa conectada con los problemas locales. El apellido consigue reflectores; la operación consigue votos.

La aceleración electoral ya empieza a generar problemas en el Congreso. Ricardo Monreal pidió a Morena que los diputados interesados en reelegirse no tengan que separarse de sus cargos. Su argumento es que una ola de licencias podría dificultar la incorporación de suplentes y afectar la aprobación de una agenda legislativa de al menos 20 reformas a partir de septiembre.

La preocupación tiene fundamento: un grupo parlamentario con decenas de vacantes temporales puede perder coordinación y capacidad de votación. Sin embargo, permitir que los aspirantes permanezcan en funciones también abre una discusión sobre equidad. Un diputado conserva exposición pública, oficinas, personal y capacidad de gestión mientras compite frente a otros perfiles sin esos recursos.

La solución no está en elegir entre Congreso paralizado o campaña desde la curul. Está en establecer reglas: prohibición de utilizar personal institucional, separación clara de actividades, fiscalización de recorridos y transparencia sobre gastos.

Mientras los partidos calculan candidaturas, la realidad laboral presenta números mucho menos cómodos. La informalidad alcanza 54.8% de la población ocupada. En 21 años sólo disminuyó 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 59.3% en 2005 al nivel actual.

El Plan Nacional de Desarrollo pretende llevarla a 48.9% en 2030. Para cumplir esa meta, México tendría que reducir más informalidad en menos de seis años que durante las dos

décadas anteriores. No es imposible, pero sí exige una economía mucho más dinámica y una estrategia diferente.

La informalidad no es únicamente vender productos en la calle. Incluye trabajadores de micronegocios, servicios, plataformas y empresas que operan sin registrar adecuadamente sus relaciones laborales. Son personas sin cobertura permanente, vivienda, pensión suficiente o protección frente a riesgos de trabajo.

Este escenario también cuestiona al sindicalismo. Las organizaciones laborales han construido su fortaleza en instituciones públicas y grandes empresas, pero una parte creciente del mercado se encuentra fuera de esos espacios. Representar únicamente a quienes ya tienen contrato colectivo deja sin voz a millones que enfrentan mayor precariedad.

Los sindicatos necesitan adaptar sus modelos. Un repartidor, un conductor por aplicación o un trabajador independiente no siempre comparte fábrica, oficina ni patrón visible con otros compañeros. Su representación requiere herramientas digitales, asesoría flexible y negociación sectorial. La vieja lógica sindical puede seguir siendo útil, pero ya no es suficiente.

El empleo formal también perdió velocidad. Entre enero y junio se registraron 262 mil 628 nuevos puestos ante el IMSS, una cifra inferior a las necesidades del país. Organizaciones empresariales estiman que se requerían cerca de 600 mil plazas durante el semestre para mantener una trayectoria adecuada.

El problema no se limita a cuántos empleos se generan. Sólo 39.5% de los empresarios consultados considera que es un momento adecuado para invertir. La incertidumbre económica, la inseguridad y la falta de claridad regulatoria frenan decisiones de expansión.

Sin empresas que inviertan no hay puestos nuevos, pero sin trabajadores con ingresos y derechos tampoco existe un mercado interno sólido. La economía necesita ambas partes; pretender que una puede crecer permanentemente a costa de la otra es una receta conocida y bastante mala.

En este contexto, el IMSS enfrenta su propia discusión. El Instituto respondió a señalamientos sobre las quejas registradas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aclaró que una inconformidad no acredita automáticamente una violación. Para determinar responsabilidad, cada caso debe investigarse y resolverse.

La aclaración es válida. Presentar una queja no equivale a ganar un juicio. Sin embargo, tampoco significa que la inconformidad carezca de valor. Cada expediente puede revelar problemas de atención, demora, trato, medicamentos o trámites que deben revisarse.

El IMSS informó que las quejas notificadas por la CNDH disminuyeron 34.3% durante el primer semestre de 2026 y que las recomendaciones bajaron 84% frente al mismo periodo de 2025. La institución atribuye parte del resultado a la estrategia Más Gestión y Menos Quejas y al trabajo de los agentes de Trato Digno.

La cifra es favorable, pero necesita una prueba adicional: la experiencia del derechohabiente. La reducción será una buena noticia si significa que las personas consiguen citas, reciben medicamentos y resuelven sus trámites antes de presentar una queja. Será menos convincente si sólo refleja cambios en la clasificación o en los canales de recepción.

El IMSS tiene la oportunidad de demostrarlo publicando información sencilla: cuánto tarda una consulta, qué porcentaje de recetas se surte completamente, cuántas cirugías se difieren y qué problemas se repiten en cada unidad. La transparencia puede revelar fallas, pero también permite corregirlas.

La fotografía de este martes tiene dos velocidades. La política corre rumbo a 2027 con encuestas, aspirantes y cálculos legislativos. El empleo, la formalidad y la atención médica avanzan mucho más despacio.

Esa diferencia importa porque las campañas pueden ganar una elección, pero son las instituciones las que deben sostener el país después de que terminan los discursos. Morena deberá resolver sus candidaturas sin fracturarse; la oposición tendrá que demostrar que puede competir fuera de sus bastiones; los sindicatos necesitan representar al nuevo mercado laboral; y el IMSS debe convertir la reducción de quejas en servicios efectivamente mejores.

La carrera electoral ya comenzó. La pregunta que realmente importa es si el empleo, la seguridad social y la capacidad institucional lograrán alcanzarla.